

# El descubrimiento balbuceante de los procesos de internacionalización

Armand Mattelart

Los años setenta marcan un giro en el pensamiento comunicacional sobre los procesos de internacionalización en su relación con la democracia, aunque plantean más preguntas que respuestas. El Informe MacBride cristaliza parcialmente este viraje. Más allá de los sesgos, de las carencias y de su *ambigüedad esquizoide*, como decía Herbert Schiller, su mayor mérito es el de existir. Es la primera vez que un documento, legitimado desde una institución del sistema de las Naciones Unidas, confiere visibilidad a los desequilibrios estructurales en el campo de la comunicación y, al mismo tiempo, propone algunas pistas para subsanarlos. Al dar visibilidad a los *problemas de comunicación*, el Informe ofrece una posible clave común de lectura a la multitud de iniciativas paralelas que la Unesco emprende en estos mismos años setenta. Un ejemplo es el de la serie de conferencias regionales sobre las políticas culturales decididas en la conferencia sobre este tema que se desarrolló en Venecia en 1970 —es decir, antes de que se vislumbrase el debate central sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y de la Comunicación (NOMIC)—; es el caso también de las conferencias sobre políticas de comunicación. Esta lectura articulada despliega un cuerpo coherente de principios básicos de una regulación democrática de los dispositivos de la comunicación a través de las políticas públicas y de los derechos a la comunicación como concretización de la carta de los derechos humanos, aunque estas nociones permanezcan relativamente vagas. En su descargo se podría alegar que el trabajo de la Comisión refleja el estado de la reflexión jurídica alternativa, aún en pañales en esos años. Una

dificultad que persiste hoy para definir la apuesta en este campo.

En esos años setenta, voces hasta entonces descartadas de los hemisferios internacionales hicieron escuchar sus opiniones sobre el ordenamiento del mundo, tanto al nivel económico como comunicacional. No es posible aislar el Informe del trasfondo geopolítico que legitima la irrupción de otra visión del mundo distinta a la que estaba acostumbrada la propia Unesco desde los años cincuenta. De manera general, se puede decir que la entrada en la era postcolonial significa el surgimiento en el espacio internacional del actor *Tercer Mundo*. Lo que empieza a resquebrajarse es el paradigma evolucionista de la pareja desarrollo-subdesarrollo y su concepto informacional y lineal de la historia, extraño a la idea de la diversidad y de la creatividad de las culturas. La crisis de este retorno de la vieja ideología del progreso señala la crisis de los esquemas de la comunicación-modernización por difusión de las innovaciones a partir de un centro civilizador, que habían dominado las referencias de los ingenieros y planificadores sociales de la Unesco durante más de dos decenios. En cuanto al excesivo peso que adquiere la cuestión de los flujos de noticias de las grandes agencias de prensa en la apertura de las discusiones sobre el intercambio desigual, se debe a acontecimientos históricos precipitadores de una toma de conciencia. Por ejemplo, lo ocurrido durante los primeros años setenta en el Chile de Salvador Allende, donde la AP y la UPI tuvieron un papel protagónico en las campañas en contra de las reformas de la Unidad Popular. No por casualidad se invitó a integrarse en la Comisión MacBride al chileno Juan Somavía, fundador del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), radicado en la ciudad de México en los años que siguieron al golpe de estado del general Pinochet. Este Instituto se reveló como un laboratorio de

---

**Armand Mattelart**

*Profesor emérito de la Universidad Paris 8 (Francia)*

ideas acordes a un proyecto de Nuevo Orden Mundial de la Información y de la Comunicación.

Las reacciones al Informe están a la medida de la *revelación* de los *problemas de comunicación*. Intolerancia de Estados Unidos, defendiendo su vieja doctrina del *free flow*, y oportunismo de la Unión Soviética, instrumentalizando las demandas legítimas del Movimiento de los No Alineados en favor de un Nuevo Orden para reafirmar su política de cierre de sus propias fronteras. El enfrentamiento entre ambas superpotencias reduce el debate a uno más de los frentes de la guerra fría. No menos importantes son los intereses que mueven el Movimiento de los Países No Alineados en sus reivindicaciones: algunos de sus componentes tomaron la demanda de un Nuevo Orden internacional como coartada para tapar sus violaciones de la libertad de expresión en su propio territorio. Finalmente, mientras las organizaciones corporativas tomaron rápidamente conciencia de la necesidad de organizarse para oponerse a la idea de regulación y de política pública, se observa en cambio la ausencia de una acción estructurada de la sociedad civil organizada. Esto fue debido principalmente al hecho de que la visión reinante sobre la *comunicación* en las fuerzas de cambio es por lo esencial instrumental.

Alrededor del Informe y del NOMIC se ha tejido una leyenda negra. Incluso hoy pocos se atreven a recordar estos antecedentes dentro de la propia Unesco. Este tabú ha paralizado la posibilidad de un retorno crítico sobre el pasado y sus contradicciones. Sigue impidiendo que se aprecie en su justo valor este momento pionero y original de la construcción de la larga memoria de las luchas para la democratización de la comunicación. El periodo de hibernación de la idea de política pública y de auge paralelo de la «autorregulación» por virtud del mercado y de la técnica, en los años de la desregulación y de las privatizaciones salvajes, ha contribuido a establecer una tabula rasa epistemológica. Lo menos que se puede decir es que la vuelta de la delegación estadounidense a la Unesco en 2003 después de 17 años de ausencia no favorece la desaparición de la hipoteca.

Hubo que esperar a los inicios del nuevo siglo, con la quiebra de las promesas del modelo ultraliberal y las señales dadas por nuevas fuerzas de resistencia, para que resurjan en los debates internacionales los conceptos de

*derechos a la comunicación* y de *políticas públicas*. Las voces que los defienden se han multiplicado a medida que se estructuraban las estrategias de los movimientos sociales y de las coaliciones profesionales. Se han multiplicado también los lugares institucionales en que se juega el sentido de estos conceptos que han acabado por nuclear las negociaciones sobre la excepción cultural y la diversidad cultural, la sociedad de la información o la gestión de los bienes públicos comunes. Las discusiones sobre los artículos de las convenciones, declaraciones y planes de acción que buscan sustraer la información, la cultura y el conocimiento al imperio de la mercancía y de las finanzas toman cada vez más un carácter jurídico y técnico, prefigurando las luchas culturales del nuevo siglo. Pero no por ello ha desaparecido la argumentación maniqueísta en los círculos que se oponen a la idea de regulación democrática. Más que nunca bajo todas las latitudes se empeñan en asimilar lo público a la censura y al control de las mentes.

Si los actores reticulares de la sociedad civil organizada hacen escuchar cada vez más sus *múltiples voces* desde *muchos mundos* en los debates internacionales, también tratan, en el terreno, de contrarrestar la relación asimétrica entre los ciudadanos y los nuevos o antiguos dispositivos de la hegemonía cultural e informacional. Así, a tientas, han empezado a imaginar formas inéditas y permanentes de contrapoder democrático a nivel nacional y local, construyendo una fuerza ético-moral en contra de la apropiación indebida de la esfera pública por las lógicas de la concentración político-financiera.